

**Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3
Málaga**

Procedimiento Abreviado nº 47/2016

Magistrado: Óscar Pérez Corrales

Recurrentes (2):

Letrado y procurador: Antonio Pantoja Sánchez y Jesús Olmedo Cheli

Demandado (1): Ayuntamiento de Marbella

Letrado y procuradora: Juan Diego Miranda Perles y Amalia Chacón Aguilar

Demandado (2):

Letrado y procurador: Eduardo Fernández Donaire y Alejandro Salvador Torres

SENTENCIA 75/17

En Málaga, a 6 de marzo de 2017.

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- 1. El día 22-1-2016 se interpuso por la parte recurrente “demanda de procedimiento abreviado contra el Ayuntamiento de Marbella y la mercantil en reclamación de 19 018 € (18 718 € y 300 €)”.

2. Subsanados los defectos procedimentales, se dictó decreto de admisión a trámite el día 9-5-2016, señalándose para la celebración del juicio el día 21-2-2017.



Código Seguro de verificación:W8zpY9W17YtOnleQlZHodg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	OSCAR PEREZ CORRALES 07/03/2017 12:35:48	FECHA	07/03/2017
	INMACULADA NUÑEZ PEDRAZA 07/03/2017 12:47:56		
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	1/11



W8zpY9W17YtOnleQlZHodg==



FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Es importante delimitar, en primer lugar, qué sea objeto de este recurso c-a, que lo integra la desestimación por silencio administrativo de la reclamación formulada por los recurrentes ante el Ayuntamiento de Marbella el día 11-2-2015 de 12 012,68 € (de los que 300 e corresponde a [REDACTED])

Aun cuando no lo dice así el recurrente, ejercita una pretensión de plena jurisdicción (art. 31 LJCA), pues a la declaración de invalidez del acto (de la ficción desestimatoria) añade la petición de reconocimiento de una situación jurídica individualizada mediante la fijación de una indemnización por daños y perjuicios. A la anterior pretensión acumula (al amparo del art. 9.4 LOPJ) la acción frente al concesionario (no es hecho discutido que el servicio público de que se trata es de competencia municipal conforme al art. 25.2 I) LRBRL, siendo objeto de gestión indirecta (art. 85.2 B) mediante una concesión a la sociedad privada [REDACTED]

Por vía de acción de repetición (para el caso de la aseguradora; acción directa para [REDACTED] se reclama por "daños causados en el vehículo con matrícula [REDACTED] el día 27-9-2014 en la calle Retranca del Ángel cuando introdujo la rueda delantera de su vehículo en una arqueta de saneamiento cuya tapa se había levantado y desplazado de su sitio, no pudiendo verlo debido a la abundante lluvia que tapaba dicha arqueta". La conductora del vehículo era [REDACTED] [REDACTED] que es también administradora de la sociedad [REDACTED]

SEGUNDO.- Junto al escrito de interposición del recurso c-a, ninguno de los recurrentes aportó ni el documento que acreditara la representación procesal a favor de procurador ni el relativo al art. 45.2 d) LJCA. Por diligencia de ordenación del día 28-1-2016 fueron requeridos únicamente para que acreditaran la representación procesal, siendo subsanado el defecto por [REDACTED] mediante comparecencia apud acta de su administradora solidaria [REDACTED]. Por su parte, [REDACTED] aportó escritura pública otorgando poder para pleitos.

Por diligencia posterior de 16-3-2016, se requiere a los recurrentes para que acrediten el cumplimiento del requisito documental previsto en el art. 45.2 d) LJCA. La respuesta de los recurrentes es la siguiente:

a) [REDACTED] aporta un escrito suscrito por su administradora y representante legal



Código Seguro de verificación:W8zpY9W17YtOnleQ1ZHodg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	OSCAR PEREZ CORRALES 07/03/2017 12:35:48	FECHA	07/03/2017
	INMACULADA NUÑEZ PEDRAZA 07/03/2017 12:47:56		
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	2/11


W8zpY9W17YtOnleQ1ZHodg==

afirmando que se ha autorizado al letrado Antonio Pantoja Sánchez la interposición de este concreto recurso c-a. Este documento (que no aclara quién ha autorizado, si el administrador o la junta general) va acompañado de la escritura de constitución de la sociedad, escritura de la que resulta que los partícipes de la sociedad son dos personas () – que es administradora – y (). Aporta también los estatutos sociales, cuyo art. 14 se refiere a las facultades del administrador, no constando entre ellas la de decisión de interponer recurso c-a.

b) () aporta una escritura de 6-6-2012 que eleva a público una certificación del de la reunión del consejo de administración de () de 22-5-2012 que acuerda otorgar poder a () para que por delegación del consejo autorice a procuradores y letrados la interposición de recursos c-a en representación de () y conforme al art. 45.2 d). Ni en la escritura ni en la certificación se hace referencia al artículo de los estatutos que encomienda a la administración de la sociedad la facultad de decidir la interposición de recurso c-a (que es la facultad que delega).

El día 9-5-2016 se dicta decreto de admisión a trámite y se da por válida la comparecencia de los recurrentes. En el acto del juicio y al contestar, (), alega causa de inadmisibilidad por cuanto que las recurrentes no han acreditado cumplidamente el cumplimiento del requisito previsto en el art. 45.2 b) LJCA. Como juzgador, asumí la alegación del demandado y concedí a los recurrentes plazo de diez días para que alegaran y subsanaran el defecto. No obstante ello, el juicio se celebró, aunque aclarándose que la decisión sobre el fondo se condicionaría a lo que se alagara en el trámite que se concedía.

Consecuencia de lo anterior, el día 27-2-2017 (), a través de su representación procesal, dice aportar “copia de los estatutos de () de los que se deduce que el consejo de administración resulta competente para emitir la certificación aportada en autos para acreditar el cumplimiento del requisito del art. 45.2 d)” (se refiere al documento ya consignado con la letra (b). En realidad, lo que aporta es la misma escritura de 6-6-2012 que ya había aportado y que se consideró insuficiente por mi para dar por cumplido el requisito (y que fue lo que motivó el traslado por diez días).

Respecto a () aporta documento suscrito por las dos partícipes de la sociedad autorizando la interposición del recurso.



Código Seguro de verificación:W8zpY9W17YtOnleQlZHodg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	OSCAR PEREZ CORRALES 07/03/2017 12:35:48	FECHA	07/03/2017
	INMACULADA NUÑEZ PEDRAZA 07/03/2017 12:47:56		
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	3/11



W8zpY9W17YtOnleQlZHodg==



El día 6-3-2017 [] presenta sendos escritos oponiéndose a la subsanación.

TERCERO.- Conforme al íter procedimental anterior, considero adecuado el documento de subsanación aportado por [] pues está suscrito por las dos partícipes y suscriptoras de todo el capital social, debiendo recordarse (el manifiestamente mejorable documento aportado lo hace necesario) que conforme al art. 178 RDL 1/2010, de 2 de julio, de sociedades de capital, *la junta general quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representada la totalidad del capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la celebración de la reunión.* Y añade que *la junta universal podrá reunirse en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero.*

No ocurre lo mismo, sin embargo, con [] que aporta el mismo documento que fue considerado insuficiente. Me refiero a la reciente STS, 3ª, Sec. 5ª, de 30-9-2016 (rec. 1758/2015), que refiriéndose a una doctrina consolidada que tuvo su origen en la del Pleno de 7 de febrero de 2014 (casación 4749/11) y que se reiteró en numerosas sentencias posteriores (por todas, sentencias de la Sección Quinta y de la extinta Sección Sexta de esta Sala de, respectivamente, 19 de mayo y 22 de diciembre de 2015, casaciones 446/13 y 2675/14), recuerda que:

Denunciado el defecto por alguna de las partes, no es necesario un requerimiento expreso de subsanación por el órgano jurisdiccional, siempre que haya tenido la posibilidad procesal de subsanarlo, recordando la citada sentencia del Pleno que el " artículo 138 diferencia con toda claridad dos situaciones. Una, prevista en su número 2, consistente en que sea el propio órgano jurisdiccional el que de oficio aprecie la existencia de un defecto subsanable; en cuyo caso, necesariamente, ha de dictar providencia reseñándolo y otorgando plazo de diez días para la subsanación. Y otra, prevista en su número 1, en la que el defecto se alega por alguna de las partes en el curso del proceso, en cuyo caso, que es el de autos, la que se halle en tal supuesto, es decir, la que incurrió en el defecto, podrá subsanarlo u oponer lo que estime pertinente dentro de los diez días siguientes al de la notificación del escrito que contenga la alegación. Y termina con otra norma, la de su número 3, que es común a aquellas dos situaciones, aplicable a ambas, en la que permite, sin más trámite, que el recurso sea decidido con fundamento en el defecto si éste era insubsanable o no se subsanó en plazo Alegado el defecto, sólo será exigible el requerimiento previo del órgano jurisdiccional cuando, sin él, pueda generarse la situación de indefensión proscrita en el artículo 24.1 de la Constitución. Situación que debe ser descartada en un supuesto, como lo es el de autos, en el que la parte demandada invocó con claridad la causa de inadmisibilidad que alegaba y en el que la parte actora tuvo ocasión, por brindarla el curso sucesivo del proceso, de oponer lo que estimara pertinente".

Por tanto, se le ha concedido a [] la posibilidad de subsanar en el plazo de diez días, no ya solo para hacer posible que alegara respecto de la causa opuesta por [] en el acto del juicio, sino también porque se le aclaró por mí que el



Código Seguro de verificación:W8zpY9W17YtOnleQlZHodg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	OSCAR PEREZ CORRALES 07/03/2017 12:35:48	FECHA	07/03/2017
	INMACULADA NUÑEZ PEDRAZA 07/03/2017 12:47:56		
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	4/11


W8zpY9W17YtOnleQlZHodg==

documento que había presentado (escritura de 6-6-2012 que eleva a público una certificación del de la reunión del consejo de administración de [] de 22-5-2012 que acuerda otorgar poder a [] para que por delegación del consejo autorice a procuradores y letrados la interposición de recursos c-a en representación de [] conforme al art. 45.2 d)) era insuficiente para dar por cumplido el requisito al no constar que el consejo de administración, conforme a los estatutos de la sociedad, fuera el competente para manifestar la voluntad de recurrir.

[] en lugar de aportar los estatutos, ha vuelto a aportar el mismo documento que se consideró insuficiente por mí y que motivó otorgarle plazo para subsanar. La STS, 3ª, Sec. 5ª, 20-12-2013 (rec. 1634/2011) es clara al respecto al referirse al requisito documental del art. 45.2 d):

Esta exigencia es predicable, por tanto, respecto de cualquier persona jurídica, sin matizaciones o distinciones ajenas al contenido de la norma legal transcrita. De modo que la naturaleza de la sociedad recurrente no introduce ninguna peculiaridad en el ámbito subjetivo de esta exigencia procesal prevista en el mentado artículo 45.2.d) de la LJCA.

A modo de recapitulación de esta línea jurisprudencial, dice la sentencia (Sec. 3ª) de 8 de junio de 2012 (Rec. Cas. núm. 3811/2011):

"No es irrazonable el criterio, mantenido en muchos pronunciamientos de la Sala, de que el desconocimiento de las disposiciones estatutarias relativas al ejercicio de acciones judiciales impide apreciar si el acuerdo para recurrir fue tomado por el órgano competente. En este caso, el poder otorgado por los administradores no insertaba, como se hace en otras ocasiones, las cláusulas de los estatutos sociales que atribuyen esta facultad. La mera manifestación del Notario de que los administradores ostentan capacidad para otorgar el apoderamiento no subsana tal ausencia (Sentencias de 8 de septiembre de 2011, Rec. Cas. núm. 2318/2008 y 2 de febrero de 2012, Rec. Cas. Núm. 2411/2009".

Y es que, al margen de todas estas resoluciones indicadas en el sentido expuesto, tampoco cabe ignorar la sólida base conceptual en la que esta doctrina encuentra su sustento, esto, es en el ámbito de las sociedades mercantiles, preciso es diferenciar dos facetas de su actividad: la representación y la administración. Ostenta la representación de la entidad necesariamente el órgano de administración (Ley de Sociedades de Capital: artículos 233 y 234) en tanto que en el caso de la administración o gestión no siempre es así; en principio, corresponderá también el órgano de administración (artículo 209), pero podría haber lugar para la actuación de otros órganos societarios, por todos, así, la junta general (artículos 160 y 161), al amparo de los pactos societarios incluidos en los propios estatutos (artículo 28). De ahí sigue, justamente, como no hay una imposibilidad absoluta de que la competencia para la adopción del acuerdo de litigar corresponda a un órgano distinto del de administración, la exigencia de aportar los estatutos o la certificación correspondiente del órgano competente".

En definitiva: que [] aportó como documento a efectos del art. 45.2 d) LJCA una escritura de elevación a público de un acuerdo del consejo de administración en cuya virtud se otorgaba poder para que una persona designara letrados según lo requerido en el art. 45.2 d); que pese a la confusa redacción del acuerdo, y para el caso – más favorable – de que se estuviese delegando la facultad de decidir la



Código Seguro de verificación:W8zpY9W17YtOnleQlZHodg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	OSCAR PEREZ CORRALES 07/03/2017 12:35:48	FECHA	07/03/2017
	INMACULADA NUÑEZ PEDRAZA 07/03/2017 12:47:56		
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	5/11


W8zpY9W17YtOnleQlZHodg==

mercantil sobre la voluntad de recurrir, la realidad es que no se acreditaba conforme a los estatutos que esa facultad correspondiera al órgano delegante (el consejo de administración). Así fue alegado como causa de inadmisión por [] al contestar en el acto del juicio, y como quiera que consideré que, efectivamente, no estaba acreditada aquella facultad conforme a los estatutos, y puesto que el recurrente tenía derecho a subsanar y no podía hacerlo en el mismo acto, le concedí diez días para ello. El recurrente, en el plazo de subsanación, ha aportado el mismo documento que ya se le advirtió no era suficiente, no aportando los estatutos de la sociedad.

La consecuencia de ello ha de ser la de inadmitir el recurso c-a interpuesto por [] frente al acto recurrido, con imposición de las costas de la instancia causadas por su reclamación a los demandados.

CUARTO.- Pese a la anterior decisión de inadmisión, es necesario analizar el fondo del asunto respecto del recurso interpuesto por [] titular del vehículo con matrícula [] que sufrió daños el día 27-9-2014 en la calle Retranca del Ángel cuando su conductora introdujo la rueda delantera de su vehículo en una arqueta de saneamiento cuya tapa se había levantado y desplazado de su sitio, no pudiendo verlo debido a la abundante lluvia que tapaba dicha arqueta.

La reclamación de 300 € que hace corresponde al importe de la franquicia del seguro que [] no le abonó sobre un presupuesto total de reparación de 19 018 €. No discutida la realidad del accidente (en todo caso, corroborada periféricamente por los agentes de policía que acudieron al lugar tras el accidente, pues si bien no vieron éste, sí encontraron en el lugar el vehículo, vieron el charco y la arqueta levantada, teniendo que acudir los bomberos para reparar la tapa de la alcantarilla), ha de aclararse que, en el caso, el servicio público de que se trata es de competencia municipal conforme al art. 25.2 I) LRBLA, siendo objeto de gestión indirecta (art. 85.2 B) mediante una concesión a la sociedad privada CODEMANDADA..

El escrito de demanda, de reducida argumentación jurídica, no sol no cita la normativa sobre responsabilidad patrimonial d ella Administración Pública, sino que obvia otros datos normativos que considero esenciales. En primer lugar, su planteamiento, simple, en verdad, hace ilusoria toda la construcción doctrinal y jurisprudencial que sobre la material se ha ido formando cuando concurre, como es el caso, un supuesto de gestión indirecta del servicio público. Hay que recordar que el art. 198 ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y también del



Código Seguro de verificación:W8zpY9W17YtOn1eQ1ZHodg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	OSCAR PEREZ CORRALES 07/03/2017 12:35:48	FECHA	07/03/2017
	INMACULADA NUÑEZ PEDRAZA 07/03/2017 12:47:56		
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	6/11



W8zpY9W17YtOn1eQ1ZHodg==

mismo tenor que el vigente ahora art. 214 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, dispone literalmente lo siguiente:

1. *Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.*
2. *Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites señalados en las Leyes. También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma en el contrato de obras o en el de suministro de fabricación.*
3. **Los terceros podrán** requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción del hecho, al órgano de contratación para que éste, oído el contratista, se pronuncie sobre a cuál de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. **El ejercicio de esta facultad** interrumpe el plazo de prescripción de la acción.
4. *La reclamación de aquéllos se formulará, en todo caso, conforme al procedimiento establecido en la legislación aplicable a cada supuesto.*

Por tanto, existiendo contratista, y salvo que queramos convertir en papel mojado la norma y afirmar la responsabilidad de la propia Administración apoyándonos en culpa levísimas (como si al deber general de supervisión del cumplimiento de los términos del contrato con hubiera de seguirse un deber específico de seguimiento de la total actividad del concesionario verificando todas las opciones que sigue y controlando todas las decisiones que adopta, lo que haría fútil que la Administración buscara el beneficio del ahorro y la agilidad en la gestión a través de un sistema que le obligaría a actuar como si la gestión fuera directa), ha de ser el recurrente quien pruebe que, en el caso, bien existió una absoluta desatención por la Administración del deber general de supervisión del cumplimiento del contrato (lo que no ha ni siquiera intentado el recurrente) bien existió una orden (sobre lo que nada se ha dicho).

A partir de lo anterior, y descartada la responsabilidad de la Administración, tampoco razona la recurrente sobre qué podría ocurrir en tal caso (desestimación del recurso interpuesto frente a la Administración) respecto de la acción ejercitada frente al contratista. No será ocioso recordar, sin embargo, que de la lectura conjunta de los artículos 9.4 LOPJ y 2 e) LJCA se deduce el intento del legislador de no quedar resquicio alguno en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública que permita el conocimiento del asunto a otro orden jurisdiccional distinto del contencioso-administrativo, razón por la que atribuye a la jurisdicción contencioso-administrativa tanto el conocimiento de las acciones directas (dirigidas contra la Administración y su aseguradora), como las dirigidas contra cualquier otra entidad,



Código Seguro de verificación:W8zpY9W17YtOnleQlZHodg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verfirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	OSCAR PEREZ CORRALES 07/03/2017 12:35:48	FECHA	07/03/2017
	INMACULADA NUÑEZ PEDRAZA 07/03/2017 12:47:56		
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	7/11



W8zpY9W17YtOnleQlZHodg==

pública o privada, aunque las mismas, solo de una forma indirecta, sean responsables, junto a la Administración, de los daños y perjuicios causados. En definitiva, y así nos ilustra la STS, 3ª, sec. 6ª, 21-11-2007, rec. 9881/2003, que corresponde al orden contencioso administrativo el enjuiciamiento de las cuestiones referentes a responsabilidad de la Administración pública y que, cuando ésta se articule en concurrencia con privados o compañías aseguradoras, todos ellos han de ser igualmente demandados ante el orden contencioso administrativo, que queda ya facultado, como lo era el orden jurisdiccional civil con anterioridad a la reforma del año 1998, para el enjuiciamiento de la responsabilidad tanto de la Administración pública como de los particulares.

Y si lo anterior es así, aun cuando se excluyera finalmente en sede jurisdiccional la responsabilidad de la Administración, podemos pensar que ello no imposibilita el enjuiciamiento de la responsabilidad de los particulares concurrentes con aquella. Otra interpretación de los preceptos antes mencionados iría en contra del principio de unidad jurisdiccional y conduciría a un nuevo peregrinaje de jurisdicciones, puesto ya de manifiesto con la legislación anterior, y que sería absolutamente contrario a la efectividad de la tutela judicial efectiva proclamada por el artículo 24 de la Constitución (cfr. sentencia citada y la de la misma Sala 3ª de 26-9-2007, rec. 4872/2003).

Señalar, en fin, que desde la perspectiva lógico-jurídica carecería de sentido permitir que la pretensión resarcitoria se dirigiese, además de contra la Administración, contra particulares, si el Juez contencioso sólo pudiese condenar a la Administración, o junto con ésta última, de forma solidaria al contratista o concesionario.

Pero, además, demandándose a la Administración y al particular, existe una dicotomía en cuanto al régimen jurídico aplicable, pues la responsabilidad de la Administración será objetiva mientras que la del particular (contratista en nuestro caso), será subjetiva y regida por el régimen del art. 1.902 CC (tampoco contiene el recurrente reflexión alguna al respecto).

QUINTO.- Conforme a la anterior doctrina, resulta que la parte recurrente y en relación con y pese a omitir la cita del art. 1902 CC, pues solo lo hizo en fase de conclusiones – parece considerar su proceder culposo en atención al deficiente estado de la arqueta, que se levantó por causa del agua de lluvia. Este



Código Seguro de verificación:W8zpY9W17YtOnleQlZHodg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	OSCAR PEREZ CORRALES 07/03/2017 12:35:48	FECHA	07/03/2017
	INMACULADA NUÑEZ PEDRAZA 07/03/2017 12:47:56		
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	8/11



W8zpY9W17YtOnleQlZHodg==



hecho y este déficit en el estado de la arqueta, sí parece que ocurrieron, pues ninguna virtualidad puede tener lo alegado por [] para excluir su responsabilidad con una suerte de fuerza mayor alegando ser de aplicación el Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios. Pues bien, con independencia de que esta norma se refiere a riesgos extraordinarios a afectos de seguro, que no es el caso, aun cuando se pretendiera una aplicación analógica, el art. 2.1 e) 1ª habla de “precipitaciones de intensidad superior a 40 litros de agua por metro cuadrado y hora”, lo que en ningún caso puede darse por acreditado con una información de la AEMET que ni desglosa días ni horas, pues solo se refiere a números de días al mes (28) que se superó aquel nivel de precipitación en Marbella, lo que dista de los “informes certificados expedidos por el Instituto Nacional de Meteorología, el Instituto Geográfico Nacional y demás organismos públicos competentes en la materia” a que se refiere art. 2.2 del citado Real Decreto.

Por tanto, sí existió responsabilidad [] y debe indemnizar. En relación con la cuantía y puesto que la decisión de inadmisión respecto a [] hace innecesario el estudio en profundidad de la alegación sobre exceso de daños que realiza [] (solo deberían indemnizarse, conforme al informe del Consejo Consultivo los daños en la rueda y alerón delantero), la realidad es que estos solos daños (conforme al informe del perito de la aseguradora) exceden de los 300 € de franquicia, por lo que procede la indemnización por esta cantidad, que devengará el interés legal desde la fecha de reclamación presentada ante el Ayuntamiento (11-2-2015); ambas cantidades sumadas devengarán el interés legal desde la fecha de notificación de esta sentencia hasta su pago.

Las costas causadas a la Administración serán abonadas por []; las costas sufridas por la mercantil por su reclamación a [] serán abonadas por ésta.

FALLO

(1) Inadmito el recurso contencioso-administrativo interpuesto por [] frente a la desestimación por silencio administrativo de la reclamación formulada ante el Ayuntamiento de Marbella el día 11-2-2015 (18 718 €). Igualmente inadmitido la



Código Seguro de verificación:W8zpY9W17YtOnleQlZHodg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	OSCAR PEREZ CORRALES 07/03/2017 12:35:48	FECHA	07/03/2017
	INMACULADA NUÑEZ PEDRAZA 07/03/2017 12:47:56		
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	9/11


W8zpY9W17YtOnleQlZHodg==

pretensión de condena de frente a

Las costas causadas por ambas reclamaciones a los dos demandados serán abonadas por

Frente a este pronunciamiento de inadmisión cabe recurso de apelación.

(2) Desestimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por frente a la desestimación por silencio administrativo de la reclamación de 300 € formulada ante el Ayuntamiento de Marbella el día 11-2-2015.

Las costas se imponen a

Es firme.

(3) Estimo la pretensión de condena formulada por frente a condenando a ésta a que abone la cantidad de 300 €, que devengará el interés legal desde la fecha de reclamación presentada ante el Ayuntamiento (11-2-2015); ambas cantidades sumadas devengarán el interés legal desde la fecha de notificación de esta sentencia hasta su pago.

Las costas se imponen a

Es firme.

Así lo mando y firmo. Óscar Pérez Corrales, magistrado.



Código Seguro de verificación:W8zpY9W17YtOnleQlZHodg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	OSCAR PEREZ CORRALES 07/03/2017 12:35:48	FECHA	07/03/2017
	INMACULADA NUÑEZ PEDRAZA 07/03/2017 12:47:56		
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	10/11



W8zpY9W17YtOnleQlZHodg==



ADMINISTRACIÓN
DE
JUSTICIA

DOY FE.-



Código Seguro de verificación:W8zpY9W17YtOnleQlZHodg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	OSCAR PEREZ CORRALES 07/03/2017 12:35:48	FECHA	07/03/2017
	INMACULADA NUÑEZ PEDRAZA 07/03/2017 12:47:56		
ID. FIRMA	ws051.juntadeandalucia.es	PÁGINA	11/11



W8zpY9W17YtOnleQlZHodg==